

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **BISMARCK PINEDA LÓPEZ**
Demandada : **AMPARO CANO SILVA**
Radicado : **05001 31 05 001 2017 00750 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Laboral individual – regulación de honorarios -.
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No : 88

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se declare la existencia de un **contrato verbal de prestación de servicios profesionales** en proceso ejecutivo hipotecario; se condene al **pago de los honorarios** acordados en el 35% del crédito, más las costas procesales; gastos del proceso.

Hechos relevantes de la demanda:

Afirma el demandante que **el día 13 de febrero de 2006, por mandato de la señora Amparo Cano Silva, promovió proceso ejecutivo con título hipotecario** en contra de Angélica María y Paula Andrea Piedrahita Serna, tramitado en el Juzgado 15 Civil Municipal de Medellín con Radicado 0500140030152006001600; luego del trámite procesal correspondiente, se profirió Sentencia el día 31 de julio de 2009, declarándose no probada la excepción de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución; posteriormente se tomó atenta nota de remanentes en proceso 2009-01092 del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Medellín, derecho de petición ante el Departamento de Planeación Municipal, se llevó a cabo diligencia de secuestro de inmuebles embargados, avalúo de inmuebles, se dispuso la liquidación del crédito, se nombró perito evaluador, se solicitó diligencia de remate; **el día 7 de septiembre de 2016, la demandada sin justa causa le revocó el poder**, acto aceptado el día 14 del mismo mes y año. Sostiene que **de manera verbal se pactaron los honorarios a cuota litis, en el 35% de la liquidación del crédito hipotecario, más las costas del proceso**; así mismo, que la demandada haría abonos parciales, para pagos de secuestre, perito, transporte, lo que no cumplió.

Respuesta de la parte demandada:

El Curador Ad Litem designado por el Juzgado para representar a la señora **AMPARO CANO SILVA**, sostuvo que no le constan los hechos afirmados en la demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones denominadas prescripción y genérica.

Sentencia de Primera Instancia:

EL **Juzgado Primero Laboral** del Circuito de Medellín, declaró probada de oficio la excepción denominada inexistencia de la obligación y **absolvió** a la señora **AMPARO CANO SILVA**, de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **BISMARCK PINEDA LÓPEZ**; sin condena en Costas. No se interpusieron recursos en contra de la decisión. No se allegaron alegatos de conclusión.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se conoce la Sentencia en el grado jurisdiccional de Consulta en favor del demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si se encuentran demostrados los presupuestos para declarar que, entre las partes, existió un contrato de mandato celebrado de manera verbal, con el objeto de tramitarse proceso ejecutivo hipotecario en favor de la señora Amparo Cano Silva por parte del doctor Bismarck López y si éste tiene derecho al reconocimiento y pago de los honorarios equivalentes al 35% del crédito, más las costas procesales.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

El Juzgado de Primera Instancia explicó en términos generales, que con la escasa prueba documental aportada no había lugar a dar por acreditada la gestión profesional del demandante, según lo afirmado en la demanda, sin que se hubiere contado con su colaboración para lograr la práctica de las pruebas decretadas a solicitud de parte y de oficio por el Juzgado.

Al respecto, debe recordarse que, partiendo de la **carga de la prueba**, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 164 del Código General del Proceso; debiendo las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen** (artículo 167 ibídem). Conforme a lo anterior, **se impone a las partes procesales la obligación de aportar las pruebas en que fundan**

sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma o un efecto jurídico particular; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de sus pretensiones.

Sobre el tema objeto de análisis, la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia** en **Sentencia SL4902-2021**, en un proceso declarativo donde se pretendía el reconocimiento y pago de honorarios, indicó que conforme al principio general de la carga de la prueba, prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, **el interesado debe demostrar que: “...i) celebró un contrato para una gestión determinada, partiendo de la base que a las partes ha quedado la facultad primigenia para definir la contraprestación de los servicios, y si existe ese pacto, aquél se erige en la fuente que normalmente define la controversia generada, en razón al tipo de cláusulas y el objeto del contrato; ii) que ésta fue realizada y, iii) que conforme con las reglas o clausulado celebrado entre las partes, se tasó un reconocimiento monetario...”** (Negritas fuera de texto).

Así mismo, en **SL3364-2019** señaló que “...**La profesión de la abogacía, como cualquier otra profesión liberal genera honorarios - salvo que se decida hacerlo de manera gratuita, lo que acá no aconteció- y en tal medida, quien la ejerza tiene derecho a reclamarlos cuando esté demostrada la actividad profesional para la cual fue contratado, ello en razón a que el contrato de mandato por naturaleza es oneroso...**” (Negritas fuera de texto).

Por su parte, el **artículo 243 del Código Civil**, establece que el mandato puede ser gratuito o remunerado y que **la remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el Juez.**

En el caso bajo examen, el demandante afirma que por mandato de la señora Amparo Cano Silva, en el año 2006 promovió proceso ejecutivo con título hipotecario, que en el año 2016 le fue revocado el poder sin justa causa y que **de manera verbal se pactaron los honorarios a cuota Litis, equivalentes al 35% de la liquidación del crédito hipotecario, más las costas del proceso;** lo que indica la **inexistencia de prueba documental sobre el mencionado pacto** y tampoco hay reconocimiento de la obligación por la demandada, quien está representada en el proceso por Curador Ad Litem.

Respecto a la acreditación de la gestión realizada, se aportaron algunas piezas procesales correspondientes al trámite del proceso ejecutivo hipotecario, relacionadas con solicitud, decreto y práctica de secuestro de bien inmueble, despacho comisorio, peticiones y respuestas sobre nomenclatura en Curaduría Urbana y Secretaría de Hacienda Municipal, solicitud de emplazamiento, solicitud de certificado de avalúo catastral, nombramiento de perito para avalúo comercial, solicitud de diligencia de remate, donde figura el demandante como apoderado de la señora Amparo Cano Silva; documentos que no tienen secuencia en el tiempo y no reflejan la actuación procesal completa como para extraer de allí que el doctor Pineda López siempre estuvo encargado de la gestión judicial, entre los años 2006 y 2016, como se afirma en la demanda.

Máxime si se tiene en cuenta la **fecha de la presentación personal ante Notario, de un poder otorgado** para que *continúe y lleve hasta su culminación el proceso de la referencia*, suscrito no solo por la demandada Amparo Cano Silva, sino también por César Mauricio Pérez Cano, diligencia realizada los días **26 y 12 de**

octubre de 2011, respectivamente (fls 20 y 21 archivo 02); no obstante, también se aportó copia de la demanda ejecutiva, con membrete del abogado Bismarck Pineda López y sello de recibido en la Oficina Judicial de Medellín el día 13 de febrero de 2006 (fl 52 archivo 02); sin que se encuentre explicación razonable para que la demandada y un tercero, otorgaran poder para continuar el trámite del proceso, cuando habían transcurrido cinco (5) años después de presentada la demanda con radicado **2006-00160**, falta de claridad que surge precisamente por no contarse con la copia del expediente ejecutivo, siendo esta la prueba idónea para constatar la gestión realizada por el profesional del derecho.

Es de anotarse que, ante la falta de actividad probatoria del interesado, el Juzgado de Primera Instancia haciendo uso de su facultad oficiosa, en audiencia del 23 de abril de 2021 decretó como pruebas, requerir al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, para que aportara copia del proceso ejecutivo, imponiéndole al demandante la carga de gestionar el correspondiente oficio; así mismo, se decretó el testimonio de Solanyer Jiménez Saldarriaga, solicitado por el demandante, dejando a su cargo la gestión para su citación y comparecencia a la audiencia (archivo 01 carpeta 04); sin que el demandante asistiera a ninguna de las audiencias, tampoco gestionó el oficio dirigido al Juzgado Civil de Ejecución para obtener copia del expediente, pese a que fue requerido nuevamente mediante Auto del 19 de julio de 2021 y se trataba de prueba que le favorecía; la testigo por él solicitada tampoco acudió a la audiencia.

En el expediente no hay prueba de la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo hipotecario, siendo esta la base sobre la cual se calcularía el 35% que se aduce fue pactado con la

demandada; crédito que, según el histórico de gestión anexo, fue aprobado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, mediante Auto del 17 de noviembre de 2009 y a la liquidación de costas que también se reclama como parte integrante de los honorarios, se le dio aprobación el día 4 de diciembre del mismo año (fl 59 archivo 02); pero se reitera, dichas pruebas no fueron allegadas a este proceso y constituyen el soporte para establecer el monto de los honorarios pretendidos, que se afirma fueron acordados de manera verbal, pero de ello tampoco hay constancia, carga probatoria que debió asumir el demandante y pese a contar el Juez con facultades para decretar pruebas de oficio, como en efecto procedió la *a quo*, tampoco puede suplir la falta de diligencia o de cumplimiento de las cargas procesales que incumbe a las partes.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia.

COSTAS:

No se condenará en esta Segunda Instancia al haberse conocido en el grado jurisdiccional de Consulta en favor del demandante.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia de la fecha y procedencia conocidas, que se revisa en el grado jurisdiccional de Consulta en favor del demandante; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: No se **CONDENA** en costas en Segunda Instancia; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **BISMARCK PINEDA LÓPEZ**
Demandada : **AMPARO CANO SILVA**
Radicado : **05001 31 05 001 2017 00750 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Laboral individual – regulación de honorarios -.
Decisión : Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
Sentencia No : 88

FECHA SENTENCIA: 15 de mayo de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy martes 16 de mayo de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 16 de mayo de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario